SISTEMA ELECTORAL Y REFORMA POLÍTICA

MANUEL ANTONIO GARRETÓN M.*

INTRODUCCIÓN

SISTEMA ELECTORAL Y CONTEXTO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La discusión en torno al sistema electoral forma parte de las tareas no realizadas por la democratización política chilena, independientemente de que se discuta si la transición terminó o no. Dicho sistema, denominado bi-nominal mayoritario, corresponde a uno de los enclaves autoritarios cruciales del régimen militar, por cuanto en torno a él se estructura todo el sistema de empate político institucional consagrado por la dictadura para permitir a su bloque civil, es decir, a la derecha gestada bajo esa dictadura, tener en democracia un poder de veto, que no guarda relación con su condición de minoría social, política y electoral. Se trata también del enclave de mayor duración, gran responsable de la distorsión de la voluntad popular en los quince años de régimen post-autoritario. Su vigencia se mantiene, desde septiembre del 2005, no como parte del texto constitucional sino como ley orgánica constitucional, instancia, a su vez, de la misma Constitución del 80 que posibilita proyectar los principios y mecanismos autoritarios a vastas esferas de la vida social.

Luego de las elecciones del 11 de diciembre de 2005, el gobierno de Lagos ha anunciado el envío de un proyecto de ley que sustituya este

* Muchas de las ideas de este trabajo han sido fundamentadas y desarrolladas en dos proyectos coordinados por el autor, por lo que aquí serán muchas veces solo enunciadas. Ver "La Calidad de la Política en Chile" (Fundación Chile 21, Colección Ideas, Año 5, N° 42, Mayo 2004) y "La Calidad de la Política en Chile" (coord). Informes Finales, Fase I (2003) y Fase II (2004). Fundación Chile 21.

sistema electoral, lo que se ha materializado como proyecto de reforma constitucional, calificado de suma urgencia, en el que se consagran los principios de proporcionalidad política y adecuada representación regional, eliminándose el número actual de parlamentarios, y definiendo el plazo de un año para modificar la actual fórmula establecida. Se borra de este modo y afortunadamente, lo afirmado hace unos meses acerca de la gran conquista que significaba sacar de la Constitución el sistema electoral.

Pero no basta con considerar el sistema electoral bi-nominal solo como enclave autoritario, el cual, una vez superado, permitiría hablar de una democracia plenamente alcanzada. Lo cierto es que, pese a la indispensabilidad de su eliminación y reemplazo por uno verdaderamente democrático, ello es una condición necesaria pero no suficiente de una democracia política que merezca el nombre de tal. En efecto, un sistema electoral no resuelve por sí solo la vigencia de un régimen democrático ni mucho menos su calidad y legitimidad. Lo anterior supone que este debe encuadrarse en un contexto de principios, instituciones, mecanismos y cultura democráticos y que, cuando ello no ocurre, junto a la reforma necesaria del sistema deben realizarse otras transformaciones políticas que aseguren que el sistema electoral forme parte de lo que todos aceptan y reconocen como democracia. Y es evidente que el primero de estos contextos lo da la existencia de una Constitución democrática, lo que no se da en el caso chileno, todo lo cual contribuye a una creciente degradación de la legitimidad política.

En lo que sigue, entonces, examinaremos los efectos no democráticos que ha tenido en Chile el sistema bi-nominal mayoritario, propondremos un nuevo sistema que se ubique dentro de la tradición chilena y un conjunto de medidas adicionales al mismo sistema, y formularemos una serie de propuestas de reformas políticas que son un complemento indispensable de la reforma del sistema electoral para asegurar un régimen democrático. Para ello enunciaremos tanto los principios como los ámbitos de lo que debiera constituir una reforma política integral.

EL CARÁCTER ANTIDEMOCRÁTICO DEL SISTEMA BI-NOMINAL

Existe suficiente evidencia de las falencias del actual sistema electoral en términos teóricos: no respeta las mayorías haciendo que en la práctica, el número de escaños que obtiene la minoría que llega en segundo lugar sea equivalentes al de la mayoría, no permite la participación de otras minorías, con lo que le quita representatividad y diversidad al Congreso, consagrando, por lo tanto, un empate entre mayoría y primera minoría a nivel tanto de la circunscripción o distrito, como nacional. Se trata, entonces de un sistema injusto y excluyente, muy poco competitivo pues mayoría y minoría tienen prácticamente asegurado cada una un puesto, por lo que la competencia se traslada al interior de cada coalición y de cada partido para la obtención del cupo, lo que significa que la ciudadanía tiene poca o ninguna opción real puesto que solo ratificará un resultado en gran parte definido de antemano.

Los defensores del sistema, arguyen que, considerados en sí mismos, todos los sistemas electorales tienen defectos y que hay que analizarlos en su contexto y que, en el caso chileno, el gran mérito del mismo es que le habría dado estabilidad política al país.

Detrás de esta falacia de la estabilidad como producto del sistema bi-nominal, una de las mayores falsedades y distorsiones ideológicas de los últimos quince años, está la idea de que si el sistema no asegurara el poder de veto de la derecha, es decir, si la derecha fuera en el Congreso lo que realmente es, una minoría y la Concertación pudiera ejercer efectivamente su condición de mayoría, no habría estabilidad. ¿Hay algo menos democrático que este chantaje?

Si estabilidad política en Chile ha habido, es sencillamente porque ha existido un gobierno mayoritario en lo social y político. En otras palabras son los partidos y gobiernos de la Concertación los únicos responsables de que haya habido estabilidad política y gobernabilidad, enfrentados a la conspiración permanente de estos dos aspectos provenientes de la institucionalidad legada por la dictadura militar y sus representantes.

Lo cierto es que el sistema bi-nominal es el resultado de la lectura que la dictadura hizo de la crisis de la democracia en Chile y de la

proyección de su poder una vez finalizado el régimen militar. No corresponde, entonces, a ningún consenso nacional, sino que es una creación de la dictadura para asegurar que su bloque civil de apoyo perpetuara "la obra" de esta cuando fuera sustituida. Este apoyo civil se convertiría así en un poder de veto a través del empate en el número de escaños en el Congreso, con la, hasta entonces, oposición democrática, que se convertiría en mayoría en el régimen post-pinochetista. Para ello, además se generaban otros mecanismos, como la conformación de distritos disímiles en su número para asegurar la votación de derecha, los senadores designados y los altos quórum para ciertas materias, que impedirían a la eventual mayoría legislar de acuerdo al mandato electoral. Este empate, adicionalmente, se reproduciría en un conjunto de instituciones, en la designación de cuyos miembros el Senado tendría participación, como por ejemplo, el Poder Judicial. De modo que el efecto concreto de la aplicación de este sistema es que la oposición a la dictadura convertida en gobierno (la Concertación), no tenga en el Congreso la mayoría que le dan los votos obtenidos y que, la otra parte de aquella oposición a la dictadura ahora convertida en oposición de izquierda al gobierno de la Concertación (hoy, Pacto *Juntos Podemos Más*), quede fuera del Poder Legislativo. Mirado de este modo, en sus efectos y resultados, el contexto del que forma parte el sistema electoral, ha asegurado a los herederos de la dictadura, la derecha expresada actualmente la Alianza por Chile, el bloqueo de cualquier proyecto que busque cambiar la institucionalidad heredada.

UN SISTEMA ELECTORAL ACORDE A LA HISTORIA Y REALIDAD CHILENAS

Si nunca antes, durante la vigencia del sistema proporcional hasta 1973, hubo una crítica o una propuesta de fórmula electoral como la bi-nominal, si la instalación y mantenimiento de esta son producto exclusivo del cálculo de la dictadura y de su heredera política, la derecha, favorecida por tal fórmula, no se ve por qué el país no debiera recuperar el sistema electoral suprimido por la dictadura y solamente corregir los defectos que este tuviera siguiendo la experiencia de otros países en que se aplica.

Así, el sistema electoral que mejor se adecua a la realidad chilena, en que existe una pluralidad de partidos, expresivos de la diversidad social, es el proporcional con una redefinición distrital que permita la elección de cinco diputados por distritos de tamaño semejante y cinco senadores por circunscripción regional. Cada partido puede llevar el número de candidatos a elegir, existiendo voto de preferencia personal, para no dejar entregado al ciudadano al puro cálculo de partido, pudiendo, quien así lo desee, marcar solo preferencia de lista que se suma al conjunto de sufragios personales de una nómina para efectos de la cifra repartidora. Cada partido elige el número de representantes que le arroja esta cifra repartidora.

Esta fórmula debiera ser complementada con algunas medidas adicionales propiamente electorales, que busquen asegurar la participación y representatividad.

En primer lugar, debiera instalarse la inscripción automática y mantener el voto obligatorio, dado el carácter menos democrático del voto voluntario que deja entregada la expresión de la voluntad popular solo a los interesados y no al conjunto de la ciudadanía.¹ Asimismo, extender el derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero

En segundo lugar, establecer una opción que se considere válidamente emitida, en la que no se marca preferencia (puede ser el voto blanco actual pero validado) o en la que se rechaza las alternativas presentadas, de modo que si esta opción es mayoritaria respecto de aquellas que marcan preferencias a la lista con mayor número de votos en elecciones multi-personales, o del candidato en las unipersonales, se repita la elección con nuevos candidatos.

En tercer lugar, establecer elecciones primarias obligatorias para todos los casos de elecciones unipersonales y un sistema que garantice la libertad de los militantes de presentar candidatos en las elecciones multipersonales.

1 El caso brasilero con voto obligatorio desde la mayoría de edad, pero voluntario entre los 16 y 18 años es digno de considerarse. He fundamentado mi posición sobre el voto obligatorio y la inscripción automática en "Obligatoriedad del voto, democracia y participación. El caso chileno". (*Textos para pensar la realidad*. Buenos Aires, Año 4, N° 7, Mayo 2005. También, con el título "Inscripción automática y voto obligatorio", en *Tiempo 2000*. Santiago, N° 84, Mayo 2005)

En cuarto lugar, con el fin de alentar la conformación de coaliciones, se podría reponer el sistema de pactos, consagrado en las elecciones parlamentarias de 1973. Y, con el fin de evitar la proliferación de partidos muy pequeños, que hagan muy difícil las negociaciones y los acuerdos generales, podría fijarse un porcentaje mínimo de votación nacional para acceder a los cargos que resultaren elegidos; y otro, un poco mayor, cuando se trate de partidos o sectores que postulan solo en un distrito o circunscripción.

En quinto lugar, consagrar la segunda vuelta para todas las elecciones unipersonales, tanto presidenciales como de alcaldes.

HACIA UNA REFORMA POLÍTICA INTEGRAL

Es conocido el tema de la pérdida de centralidad de la política en la época actual y el distanciamiento y la crítica que le afectan en todas partes del mundo. Ello ha llevado a muchos a intentar llenar el vacío dejado por la política clásica con la ilusión del mercado, los poderes fácticos, los aparatos mediáticos o el simple refugio particularista (ya sea identitario o, sobre todo, individualista). La consecuencia más evidente es que, como la política no puede dejar de existir, al debilitarse su sustrato ético y cultural que es la construcción de "la buena sociedad", empieza a copiar las prácticas de esas instancias o se transforma en una actividad profesional cupular en la que se habla en nombre de un país y de un pueblo que no se reconoce en tales apelaciones.

Si bien ello es parte de la realidad en que operan hoy en día las democracias occidentales, muchas veces se ve agravado si se consideran las vicisitudes propias de los regímenes post-dictatoriales o democráticos en América Latina.

En el caso chileno, la especificidad de la crisis de la política está dada en la institucionalidad, los actores y las problemáticas heredadas de la dictadura. En este plano, se vive todavía una época post-pinochetista y no una época plenamente democrática. Estamos en presencia de un orden institucional impuesto, del que muchos no se sintieron parte cuando hubo que terminar con la dictadura, ni aún ahora, especialmente durante las elecciones. Las reglas y mecanismos de ese orden impuesto

se aceptaron solo para luego poder cambiarlos de acuerdo a nuevas alternativas, pero ello no ocurrió una vez instaurada la democracia. El resultado ha sido una mezcla de política de arreglos —los mal llamados consensos—, de enfrentamientos entre actores sin proyecto por cuotas de poder y soluciones parches que arrastran los problemas hasta que se presentan otros, lo que aumenta el distanciamiento estructural entre política y sociedad.

En gran parte, entonces, los problemas de la política en Chile, de los que el sistema electoral es una prueba evidente, tienen su origen básicamente en un orden constitucional, del que se deriva una institucionalidad completa, con la cual los ciudadanos no se identifican. Y la clase política de gobierno y oposición, por razones diferentes, ha sido incapaz de modificar ese orden político, consolidándose un círculo vicioso. Las políticas y medidas correctivas aplicadas, algunas muy importantes, corren el riesgo de terminar consolidando este sistema, puesto que hacen cada vez más difícil su transformación sustantiva.

De modo que, junto a un cambio radical del sistema electoral, deban realizarse un conjunto de reformas del sistema político, destinadas a hacerlo más equitativo, deliberativo, representativo, participativo, transparente, responsable (*accountable*) y eficaz.

Estos principios apuntan a reducir la distancia entre los ciudadanos y la política y a reforzar la relación entre Estado, política y sociedad, aceptando, a la vez, la especificidad y autonomía de cada una de estas esferas, entendiendo sus autonomías.

Examinaremos a continuación algunos ámbitos de aplicación de los principios enunciados.

LOS ÁMBITOS DE LA REFORMA POLÍTICA

CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE GOBIERNO

En septiembre del 2005 se promulgaron las reformas constitucionales y un nuevo texto en que se sistematizaban todas las reformas hechas hasta ahora a la Constitución impuesta por la dictadura. Algunos proclamaron entonces que estábamos ante la Constitución del

siglo XXI, que se habían eliminado los enclaves autoritarios, que se había terminado la transición. Se celebraba que el sistema electoral bi-nominal, clave de todo el sistema político heredado de la dictadura y no modificado por estas reformas, había dejado de formar parte del texto constitucional y pasaba a formar parte de una Ley Orgánica Constitucional, más fácil de modificar. Este supuesto avance es negado unos meses después por el propio gobierno al proponer una reforma constitucional que introduzca el principio de proporcionalidad en la Constitución misma. Lo más grave es que se clausura así el debate nacional en torno a la necesidad de que el país genere su propio consenso sobre su modo de convivencia y la organización del poder, que es básicamente una Constitución. No solo no ha habido debate nacional sobre la Carta Fundamental y aquellos que serán elegidos son los mismo que hacen las reformas sin consulta popular, sino que tampoco esta Constitución expresa las lecciones aprendidas de la experiencia histórica reciente, en especial de la dictadura, y más bien reproduce ciertos principios básicos derivados de la misma en lo concerniente al Estado y al orden socio-económico. En síntesis, el país no tiene una Constitución que se haga cargo de su historia y exprese el orden deseable hacia el futuro.

De modo que la primera gran reforma de la institucionalidad política del país debe ser abrir un "momento constitucional" del cual el país ha carecido desde que se recuperó la democracia.² Y existen diversas fórmulas para ello. Pero todas tienen dos condiciones fundamentales, una que quienes legislen los cargos futuros no sean los mismos que los van a ocupar y, otra, que haya mecanismos de participación, consulta o referendación popular. En este sentido, tal vez la única reforma constitucional que haya que intentar sea la de permitir un acuerdo sobre el método para generar una Constitución democrática para el Bicentenario, lo que puede hacerse a través de un simple artículo transitorio en la Constitución actual.

2 Sobre este tema, ver mi artículo "Reformas constitucionales o nueva Constitución". (*Los Estados Unidos de América y Chile: ¿Una Nueva Relación?*, RIL Editores, Santiago 2005)

Una nueva Constitución debiera considerar al menos dos cuestiones que no han sido abordadas en Chile en las anteriores fórmulas constitucionales y que fortalecen el funcionamiento de la democracia junto a la reforma del sistema electoral.

La primera se refiere al sistema de gobierno presidencial. Desde siempre se han cuestionado los problemas derivados del presidencialismo excesivo en Chile y la necesidad de introducir en el sistema de gobierno principios y mecanismos que, sin convertirlo en estrictamente parlamentario, como insisten algunos, elimine rigideces del actual sistema. Sobre todo si se camina hacia un mecanismo proporcional que aumentará la diversidad del Parlamento.

En este sentido, debiera abrirse la discusión hacia fórmulas que, por ejemplo, consagren la figura de un Jefe de Gabinete, cuyo nombramiento por parte del Presidente cuente con el apoyo mayoritario del Parlamento, pero que solo el Presidente pueda remover, pues sería de su confianza. Es probable que esto conduzca asimismo a una revisión de las funciones de las Cámaras y, en todo caso, sería conveniente uniformar remuneraciones y tiempos máximos de ejercicio de sus componentes.

Otra fórmula se refiere a los gobiernos regionales. En este aspecto, los Consejos regionales debieran ser electos con funciones normativas y fiscalizadoras y la autoridad regional nombrada por el Presidente con consulta a dicho Consejo, de modo de combinar el principio de Estado unitario con elementos de descentralización y participación regional.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA

Un segundo conjunto de reformas políticas, algunas de las cuales pueden ser parte de una nueva Constitución, tendrían por objeto aumentar y mejorar la participación ciudadana en los procesos y decisiones políticas y asegurar su rol de control y vigilancia. Más allá de lo señalado en torno a la inscripción automática y el voto obligatorio y a elecciones primarias, una reforma política orientada a estos dos principios debiera generar mecanismos de resolución de problemas de inequidad en la participación política que afectan a ciertos sectores, y de consulta y participación en las decisiones públicas.

Por una parte, estamos en presencia del principio de equidad en la participación política de sectores discriminados o con acceso escaso a la política, y de otros excluidos por razones estructurales y culturales: las mujeres y los pueblos originarios.

Respecto del principio de género o de participación de las mujeres, hay que consagrar la paridad de género en todos los cargos públicos y de representación a nivel nacional y regional. Tratándose de cargos unipersonales como los altos puestos de gobierno (Ministerios, Subsecretarías, Jefaturas de División, Intendencias, Seremis) esta paridad se relacionará con el número total de puestos del mismo tipo. Tratándose de cargos unipersonales electos, como alcaldes, puede considerarse que este principio se cumpla a través de las elecciones sucesivas. En general, de lo que se trata en las elecciones es que no solo los partidos o listas cumplan con llevar la mitad de candidatos hombres y mujeres, sino que esta paridad refleje la composición final del cuerpo colectivo, ya sea Parlamento, Municipio, Consejos regionales. El mecanismo de cuotas mínimas puede ser un camino para la paridad, pero es la paridad misma la que, en definitiva, hay que asegurar.

En relación a los pueblos indígenas, cabe el establecimiento de cuotas de representación en el Congreso, Consejos regionales y municipales, propuestos en algunos proyectos de ley, y la generación de un Parlamento Indígena para el tratamiento de aquellas temáticas propias que los afectan.

Por otro lado, están los mecanismos que permitan una mayor participación de la ciudadanía en política, más allá de los incentivos que el mismo sistema electoral provee y a los que nos hemos referido. Ello significa, implementar mecanismos como la iniciativa popular tanto de ley como en el plano de las normas regionales y municipales; consejos de organizaciones de la sociedad civil en los distintos niveles, que puedan ser consultados formalmente por los órganos legislativos y normativos; creación de Comisiones Deliberativas, también en distintos planos, para discutir y hacer proposiciones en torno a grandes problemas; presupuestos participativos. Además, habría que revisar la estructura del Estado para permitir efectivamente la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas, lo que es un aspecto débil en el proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana enviado por el gobierno.

Si bien la crítica a “los políticos” tiende a ser prejuiciada y carente de fundamento, es evidente que hay medidas institucionales que podrían complementar el mejoramiento de la clase política a través del sistema proporcional.

Una cuestión central en este ámbito es evitar la transferencia de legitimidades entre la función pública y algunas funciones privadas. Ello implica regular drásticamente las incompatibilidades de quienes postulan, y no solo ejercen, cargos públicos, con el desempeño de cargos y profesiones determinados, especialmente en el ámbito empresarial, mediático, rectorías educacionales, rangos militares. Tales incompatibilidades debieran consagrar tiempos relativamente largos de no ejercicio de tales funciones antes de aspirar a cargos públicos. A la inversa, también la salida de cargos públicos debiera estar acompañada de plazos largos antes del ejercicio de funciones privadas como las señaladas.

Asimismo, es de suma importancia el tema de la probidad en materia económica, simbolizada por medidas como los fideicomisos ciegos, que tienen, más bien, un efecto simbólico menor, por lo que debieran aplicarse solo a las candidaturas, debiendo los elegidos desprenderse de empresas al momento de asumir los cargos. También se incluyen en este campo, disposiciones tales como las declaraciones de patrimonio de todos quienes ejercen cargos públicos o que administran recursos sociales (AFP, ISAPRES), al comienzo y fin de sus funciones, parte de lo cual acaba de aprobarse en una ley.

Otro aspecto ético de igual o mayor importancia que la probidad en materia económica, es el comportamiento en relación a la violación de derechos humanos bajo la dictadura. Es sin duda un escándalo, y así lo han comprendido las Fuerzas Armadas, cuando disponen ascensos y proponen jefaturas, que participen en cargos públicos de elección quienes estuvieron involucrados directa o indirectamente en los crímenes cometidos por el régimen militar. De modo que debiera existir una norma que establezca que para postular a cargos públicos se efectuara una declaración de no haber sabido ni participado en violaciones de derechos humanos, así como de solicitud de perdón y condena de lo ocurrido, en el caso de haber tenido conocimiento de ello.

Por último, son necesarias medidas que impidan el congelamiento de la clase política y que se refieren a la no elegibilidad para ningún cargo (diputados, alcaldes, concejales, consejos regionales) por más de dos períodos consecutivos, con excepción del Presidente, quien no puede ser reelecto para el período siguiente y el de los senadores para los cuales, o se acorta el mandato a cuatro años, con reelección posible para el período siguiente, o se mantienen los ocho años, pero sin re-elección inmediata. Estas medidas debieran aplicarse también para las directivas partidarias.

POLÍTICA, DINERO Y COMUNICACIÓN

En este campo, el objetivo fundamental es, por un lado, asegurar el financiamiento público de la actividad política; y, por otro, evitar la concentración de los poderes mediáticos, políticos y económicos de modo de limitar las influencias recíprocas, evitando los mutuos respaldos indebidos.

El financiamiento de la actividad política³ no estuvo regulado hasta agosto de 2003 cuando se aprobó la Ley 19.884 de Transparencia, límite y control del gasto electoral, a la cual se agregaron sanciones para los que infringiesen los límites de los gastos, en agosto de 2004, y modificaciones añadidas durante 2005, para cubrir las elecciones presidenciales. Pese al avance histórico que esto significa en cuanto a ser una señal de revalorización de la política, al aumentar la transparencia, limitar gastos y dar el patrocinio financiero del Estado a la actividad electoral, dicho marco regulatorio presenta serias deficiencias: deja fuera el financiamiento público de los partidos no destinado a actividades de campaña, establece límites muy altos de gasto sin controles adecuados y acepta la participación de empresas privadas en donaciones de campaña, un porcentaje de las cuales es reservado. Al mismo tiempo,

3 Ver M.A. Garretón, "Coping with opacity. The financing of politics in Chile", en Carlos Malamud y Eduardo Posada Carbó (eds.), *The financing of politics. Latin American and European perspectives*, Institute of Latin American Studies. University of London, Londres, 2005.

no son abordados otros aspectos del financiamiento de la política, como el aporte estatal a los partidos, recursos para formación, investigación y capacidad técnica de actores e instituciones políticos, facilidades para acceso a medios de comunicación. De este modo quedan pendientes nuevas reformas que conduzcan a una política general de financiamiento del conjunto de la actividad política, sin lo cual esta queda dependiendo de quienes poseen la riqueza.

En lo referente a la separación entre política y dinero, están pendientes regulaciones sobre *lobbies*, tráfico de influencias, incompatibilidades de altos puestos económicos y políticos, a los que nos hemos referido, y otras materias de probidad y transparencia que afectan la relación entre el sector público y el privado.⁴

Finalmente, en cuanto a los medios de comunicación, el desafío es redefinir su poder de influencia. La relación entre el poder y las personas está mediada actualmente por los medios de comunicación. Es más, hoy en día se observa una estructura distinta respecto de cómo un problema llega a ser parte de la agenda pública. En el pasado, la agenda ciudadana era procesada por los partidos políticos para luego pasar a constituir parte de la agenda pública, y sucesivamente llegar a integrar la agenda político-institucional. Ahora, las demandas ciudadanas pasan por la agenda de los medios de comunicación y dependiendo de cómo estos procesen tales demandas, las mismas tienen la posibilidad de pasar o no a formar parte de la agenda político-institucional. En tal sentido, son mecanismos que corresponden a esta problemática,⁵ las regulaciones que impidan la concentración de la propiedad de los medios, el subsidio del Estado a los medios alternativos que garanticen la diversidad mediática, o las cláusulas sobre pluralismo en los medios, así como el reparto equitativo de los gastos de publicidad del Estado, favoreciendo a los medios con menores recursos.

4 Detalles de estas medidas en "La calidad de la política en Chile. Fase II".

5 Ídem.

CONCLUSIÓN

Hemos intentado mostrar que el sistema electoral que rige en Chile forma parte de la proyección política de la dictadura militar en democracia; es decir, se inserta en una institucionalidad más amplia cuyos principios son totalmente ajenos a cualquiera visión democrática. De modo que su sustitución y reemplazo por otro de tipo proporcional, con algunas correcciones, acorde con la experiencia histórica de la democracia chilena, aparece como un elemento indispensable para pasar de la época post-pinochetista a una era plenamente democrática. Pero, consecuentemente, este cambio debe hacerse junto con una reforma integral de la política en Chile, partiendo por un nuevo marco constitucional e implementando los principios democráticos en las esferas del sistema de gobierno, la participación ciudadana y las relaciones entre política, dinero y medios de comunicación.